

reglo 4 los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Hágase saber. Lo provoyó y firmó el ciudadano Juez 2º de Distrito Lic. José María Canaliizo. Doy fé (Firmado).—*José M. Canaliizo.*—*Inocencio Santaella*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de justicia.*

México, Enero tres de mil ochocientos setenta y uno.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 2º de Distrito de esta capital por Bartolo Romero, por reputar violadas en su persona las garantías otorgadas por los artículos 16, 17 y 19 de la Constitución federal por el hecho de haberlo reducido á prision el ciudadano Gobernador del Distrito, lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal, la sentencia del juez de Distrito; y considerando: Que según acreditan las constancias de ese expediente, Bartolo Romero servia de soldado en el batallón Fijo de Veracruz; que desertó de dicho batallón, y en esta capital fué aprehendido por la policía y puesto á disposición del ciudadano Gobernador del Distrito federal, quien lo puso preso con el fin de remitirlo oportunamente al batallón de donde había desertado. Considerando: que esta providencia del gobierno del Distrito ha sido dictada dentro de la órbita de sus facultades y en cumplimiento de las leyes relativas al caso, y por lo mismo, no ha habido violación de garantías individuales como se asegura por el quejoso Bartolo Romero. Por las razones expuestas, y de conformidad con lo pedido por el ciudadano Promotor fiscal, se confirma la sentencia del juez 2º de Distrito de esta capital, que dice en su parte resolutive: «Que la justicia de la Unión no ampara ni protege á Bartolo Romero contra la prision ordenada por el ciudadano Gobernador, por no haberse efectuado la violación de garantías individuales que otorgan los artículos 16, 17 y 19 de la Constitución federal que el quejoso invoca, y haber procedido el ciudadano Go-

bernador del Distrito en cumplimiento de sus atribuciones.»—Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de justicia de los Estados Unidos mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*José García Ramírez.*—*Juan A. Mateos*, secretario.

Son copias que certifico. México, Enero seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Enrique Landa.*

AMPARO.

*Juicio de amparo promovido por el C. Francisco de P. Pastor, en representación de la junta directiva del camino de Toluca á Morelia, por haberse violado por la autoridad suprema en las personas de sus representados, el art. 27 de la Constitución federal, y en consecuencia las garantías que ese artículo otorga.*

PEDIMENTO DEL PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano juez:

El Promotor dice: que por vía de alegato reproduce lo dicho en su pedimento de Febrero diez y seis. Las pruebas rendidas por el Sr. Pastor, en nada afectan el punto principal, pues solo son constancias de que existió la junta y de que esta publicó algunas memorias relativas á sus trabajos; pero que no demuestran que el Gobierno, dueño del camino, autorizó dispusieran de él, aprovechando sus productos. Los datos presen-

tados servirán para la liquidación respectiva, cuando el fisco reclame lo que indebidamente percibió la junta; y protestando á salvo esos derechos pide al Juzgado declare: que no ha lugar al amparo que solicita el Sr. Pastor, quien debe ser condenado á la multa que señala el artículo 16 de la ley de 20 de Enero. México, Marzo veintisiete de mil ochocientos sesenta y nueve. (Firmado)—Herrera Campos.

*El pedimento á que se refiere el Promotor en su anterior respuesta, es el siguiente:*

Ciudadano Juez:

El Promotor dice: que D. Francisco de P. Pastor se ha presentado al Juzgado, en representación de la llamada Junta Directiva del camino de Toluca á Morelia, según lo ha acreditado con el poder que corre agregado, interponiendo el recurso de amparo, porque le han sido quitados á la citada Junta los peajes que administraba y extinguió la ley de 19 de Noviembre de 1867.

El informe del ciudadano Ministro de Fomento demuestra con evidencia, que la Junta no tenía ningunos derechos que pudieran ser atacados, y basta la simple lectura de los cuadernos que ha presentado el Sr. Pastor y lo espuesto en sus ocursos, para conocer, que si disfrutaron de los peajes, no los tenían por un título legítimo, pues solo existió un convenio que aunque reducido á escritura, solo obligaba á los que lo celebraron, sin que mudara su naturaleza, el que fueran accionistas de esa asociación los Estados de Morelia y el de México; pues á nadie que no fuera el Gobierno general, podía permitirse el disponer de los caminos públicos de la nación. Para que el contrato hubiera sido legal y útil á la Junta, necesitaba de la autorización y aprobación del Gobierno por ley federal, que faltando y existiendo solo las convenciones de los primitivos accionistas,

no obligan al Gobierno, que era el único dueño del camino, y con el cual no contaron. Que era necesaria su intervención, lo dice terminantemente la ley de 24 de Setiembre de 1842, pues los contratos sobre caminos no eran válidos sino celebrados con el Gobierno general. Que se trata de un camino nacional, sobre que es una cosa de notoriedad, es una prueba que se extinguieron los peajes en dicho camino, pues en los particulares de los Estados, sujetos á lo que para ellos económicamente decreten sus poderes, hay que atenerse á las disposiciones particulares, y en este caso el Sr. Pastor deduciría sus acciones contra un Estado, pero nunca contra el Poder federal.

Dando por supuesto que la Junta tuviera un buen derecho al camino, esto no sería óbice para que el Gobierno, en uso de las facultades extraordinarias de que se hallaba investido, hubiera decretado la ley de 19 de Noviembre que extinguió los peajes; y si esto perjudicaba los intereses de la Junta, vulnerando sus derechos, podía deducir sus acciones contra el fisco, pero no procedería el amparo.

El Sr. Pastor pretende que se ha violado la garantía que otorga el artículo 27 de la Constitución, y no es exacto, pues se refiere á la ocupación de propiedad particular por causa de utilidad pública; y en el caso no se trata sino de cosa pública como es el camino.

Es inconcuso que la Junta, al cobrar los peajes y distribuirlos, se apropió facultades que no tenía, y por lo cual contrajo responsabilidades que pudo hacer efectivas el Gobierno.

Por lo anterior, y en vista del informe del ciudadano Ministro de Fomento, al Juzgado pide declare que no ha lugar á abrirse el juicio de amparo que solicita el Sr. Pastor. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos sesenta y nueve—(Firmado)—Herrera Campos.

*Contra el fisco  
Por el Sr. Pastor*

### *Sentencia del ciudadano Juez de Distrito.*

México, Agosto seis de mil ochocientos setenta.

Visto el presente juicio de amparo, que en representacion de la compañía empresaria del camino de Morelia á Toluca, ha interpuesto el C. Francisco Pastor, á virtud de reputar violadas, por el decreto de 19 de Noviembre de 1867, las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 14 y 27: Visto el informe que como autoridad responsable rindió el ciudadano Ministro de Fomento, lo pedido por la parte fiscal, las pruebas rendidas por el quejoso; y visto en fin lo que verse debia; atendiendo á que la violacion de garantías, de que la empresa por medio de su representante se queja, se hace consistir en que habiendo adquirido á virtud de un contrato celebrado con los Gobiernos de los Estados de Michoacan y México, para la apertura de un camino carretero, el derecho de la percepcion de las dos terceras partes del producto de peajes del mismo, por todo el tiempo necesario al reembolso de las cantidades invertidas en la construccion y conservacion del camino, el decreto de diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete expedido por el Supremo Gobierno para la supresion de peajes en toda la República, ataca la propiedad de la empresa, y produce en su aplicacion al caso un efecto retroactivo, puesto que á su promulgacion, segun los términos de la escritura de contrato y las cuentas que periódicamente ha rendido y publicado la Junta directiva, aun no terminaba el derecho á percibir el producto de los peajes, lo que á no dudar seria en contravencion de las garantías que otorgan los artículos 14 y 27 de la Constitucion federal; y considerando: que por el informe del Ministerio de Fomento y documentos exhibidos por el quejoso, aparece que en mil ochocientos cuarenta y nueve se contrató con los Gobiernos de los Estados de Michoacan y México la apertura y con-

servacion de un camino carretero de la ciudad de Morelia á la de Toluca, bajo las bases de que la empresa tendria á su cargo la direccion y percibiria los productos de peajes, para entretanto se indemnizaba de los gastos y caudales invertidos en ello; y que si bien haciendo extensiva la aplicacion del decreto de diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete que suprimió el pago de peajes en toda la República, al camino de Morelia á Toluca, cuando la compañía empresaria aun no se indemnizaba ni del capital invertido al establecerse, perjudicaria sus intereses y no seria conforme á las condiciones con que al contrato se habia celebrado; sin embargo de tal hecho, (la aplicacion al caso del citado decreto) por sí solo no puede decirse importe la violacion de las garantías que el quejoso invoca: 1º, porque desde que la nacion ya independiente se rige por sí, ha sido y es de las atribuciones del Gobierno general, y no particular de los Estados ó Departamentos, el disponer y determinar con referencia á la apertura, conservacion y direccion de los caminos públicos, y sin que, como pretende la empresa por medio de su representante, esto solo se haya observado en el sistema central, pues en todos los que al país han regido la misma regla ha subsistido, como lo comprueban los diversos decretos expedidos en nueve de Octubre de mil ochocientos veintiseis, tres de Abril y seis de Noviembre de cuarenta y uno, quince de Julio, veintiseis de Octubre, veinticuatro de Setiembre y veintitres de Noviembre de cuarenta y dos, seis de Abril, diez y siete de Mayo de cuarenta y tres, quince de Julio de mil ochocientos cincuenta y tres, y los del actual Gobierno Constitucional: 2º, porque aun cuando á ciencia y paciencia del Gobierno general, la empresa hubiera estado percibiendo los peajes con arreglo á su contrato, en sentido legal no podria decirse que por sí y aisladamente este solo hecho garantizase á la misma para el efecto de ocasionar violacion de garantías, cualquiera otra determi-

nacion en contrario del Gobierno general; y cuando mas, á lo que esa tácita aquiescencia hubiera dado derecho, una vez decretada la abolicion de los peajes, seria á que la referida empresa pudiese ocurrir al tribunal competente del deudor, á fin de que judicialmente se diese la respectiva resolucion, declarando, ya la insubsistencia del contrato, ó ya la obligacion de indemnizar, pues el contrato celebrado con los Gobiernos de los Estados de Michoacan y México, no podría ser bastante á enervar, suspender ó impedir que el Supremo Gobierno, en uso de las facultades con que se hallaba investido, expidiese su decreto de diez y nueve de Noviembre; y hasta en el supuesto de que los Gobiernos de los Estados contratantes hubiesen estado competentemente autorizados para ello, ó lo que es mas, fuese esclusivo de sus atribuciones, por razon del mismo sistema federal, ni aun en tal suposicion podría decirse que el repetido decreto era en violacion de las garantías individuales, y que en consecuencia, habia lugar á lo determinado en la fraccion 1ª del artículo 101 de la Constitucion, como el quejoso ha pretendido al promover el presente juicio, sino que seria el caso de la fraccion 2ª del citado artículo, y el recurso de amparo corresponderia al representante legítimo del Estado cuya soberanía se atacaba con la expedicion de tal decreto: y considerando, por último, y con relacion á la garantía otorgada en el artículo 14 de la Constitucion, que aun prescindiendo de que con estricto arreglo á las prevenciones de la ley de veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve, no debiera tenerse presente por el hecho de que en el escrito de queja no fué expresamente designada, sin embargo, no puede decirse causado el efecto retroactivo, á que el citado artículo 14 se refiere, porque la retroactividad de una ley tiene lugar, "cuando derechos legítimamente adquiridos son destruidos ó variados por leyes contrarias á las preexistentes, que volviendo sobre lo pasado, lo mudan en perjuicio de las personas objeto de ellas" (Es-

criche, D. de L., § efect—retroact.) y no deben llamarse derechos legítimamente adquiridos, segun los hechos y principios legales ya expuestos, los que la compañía empresaria alega para continuar percibiendo los peajes, porque el contrato de que provienen no fué celebrado por el Gobierno general, quien con facultades para ello, por considerarlo de conveniencia pública y conforme á los principios constitucionales, decretó en diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete la supresion de peajes; debiendo en consecuencia la empresa ejercitar en la vía respectiva, contra los Gobiernos de los Estados contratantes, los derechos ó acciones que tengan, ya para el cumplimiento del contrato celebrado, ya para el resarcimiento de daños y perjuicios, y no en juicio de amparo y contra el Gobierno general. Por tales consideraciones, pues, y con apoyo de las razones y principios legales de que se ha hecho mérito, se declara:

1ª Que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Francisco de P. Pastor, legítimo representante de la compañía empresaria del camino de Morelia á Toluca, por no haberse efectuado, como pretende, violacion de las garantías individuales, que otorgan los artículos 14 y 27 de la Constitucion federal, con la aplicacion, al caso, del decreto expedido por el Supremo Gobierno en diez y nueve de Noviembre de mil ochocientos sesenta y siete, suprimiendo el pago de peajes en la República.

2ª Publíquese este fallo en el Diario Oficial, y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia, con arreglo á lo prevenido en los artículos 13 y 27 de la ley de veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fé (Firmado)—*José María Canalizo.*—*Inocencio Santaella*, secretario.

*Sentencia en segunda instancia del Tribunal de Circuito de México.*

México, Setiembre veintiseis de mil ochocientos setenta.

Visto este recurso de amparo interpuesto por D. Francisco Pastor, legítimo representante de la Compañía empresaria del camino de Morelia á Toluca, por creer violadas, por el decreto de 19 de Noviembre de 1867, las garantías que otorga la Constitución en los artículos 14 y 27; la sentencia de 6 de Agosto del presente año, en que el Juez 2º de Distrito de esta capital, con presencia de los decretos de 9 de Octubre de 1826, 3 de Abril y 6 de Noviembre de 1841; 15 de Julio, 26 de Octubre, 24 de Setiembre y 23 de Noviembre de 1842; 6 de Abril y 7 de Mayo de 1843; 15 de Abril de 1853 y 19 de Noviembre de 1867; de la doctrina de Escribhe, Dic. de Leg. párrafo efecto retroactivo, declaró que la justicia de la Union no ampara ni proteje al ciudadano Francisco de Paula Pastor, legítimo representante de la empresa, por no haberse efectuado, como pretende, violacion de las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 27 de la Constitución federal, con aplicacion al caso del decreto expedido por el Supremo Gobierno en 19 de Noviembre de 67; lo alegado en el acto de la vista por el ciudadano Lic. Manuel Inda, patrono del quejoso, con lo demas que se tuvo presente y ver convino. Considerando: que al expedir el Supremo Gobierno el decreto de 19 de Noviembre de 1867, que mandó suprimir los peajes en toda la República, obró en uso de un derecho reconocido, aun por parte del representante de la empresa que ha promovido este juicio (fojas 44 cuaderno de pruebas), á saber, las facultades omnímodas que le otorgó la ley de 3 de Mayo de 1862; que la obligacion que la parte de la empresa supone que pesaba sobre el Gobierno, de exceptuar de la supresion de los peajes el camino de Toluca á Morelia, que la misma empresa tenia derecho de percibir ó de in-

demnizarla previamente, en atencion á lo dispuesto en el artículo 27 de la Contsttucion federal no la tenia el Gobierno, porque la ley de facultades extraordinarias, antes citada, suspendió la garantía declarada en ese artículo; que por las mismas razones pudo el Ministerio de Fomento ejecutar la ley de 19 de Noviembre y nombrar director para el citado camino, hecho que no comprobó la parte de la empresa. Considerando que estos actos de la Suprema autoridad no perjudican, sin embargo, el derecho que la empresa pueda tener para demandar la indemnizacion posterior y el rezarcimiento de los perjuicios que justifique habérsele causado, ya por la supresion de los peajes, ya por la ocupacion del camino; pero que sobre este punto nada puede resolver la Sala en el presente juicio, porque debe limitarse á examinar y fallar si los actos acusados violaron la garantía indicada, y si cabe ó no el amparo pedido, segun lo dispuesto en el artículo 11 de la ley de 30 de Noviembre de 1861: que tanto menos podria la Sala decretar la indemnizacion y rezarcimiento, cuanto que disputados por parte del Ministerio de Fomento los derechos de la empresa, (fojas 36, cuaderno 1º), vendria á fallar un juicio de posesion y propiedad, muy ajeno del que se ha ventilado, y en que es indispensable para que proceda el amparo que los derechos violados descansen en un título indisputable. Considerando que la otra objecion que la parte actora hizo á última hora al supremo decreto de 19 de Noviembre de 67, de que es una ley retroactiva, carece de todo fundamento; porque de su texto se nota, que no afecta de modo alguno á lo pasado en términos que produzca la retroactividad. Considerando, por último, como consecuencia de lo expuesto, que en las personas de los empresarios no se han violado las garantías que indicó su representante, á saber, las que declaran los artículos 14 y 27 de la Constitución federal. Con fundamento de la ley de 3 de Mayo de 1862 y sus relativas, y de lo prevenido en el ar-

título 11 de la ley de 30 de Noviembre de 61, primero: se confirma el fallo del Juez de primera instancia, en la parte que declaró que la justicia de la Unión no ampara ni protege á la empresa actora contra la ley de 19 de Noviembre de 1867, y su aplicación hecha por el Gobierno; segundo: esta determinación no perjudica en manera alguna los derechos que la empresa pueda tener para demandar en el juicio correspondiente la indemnización y resarcimiento de los perjuicios que justifique habérselo causado. Hágase saber, y con testimonio de este auto, que se publicará por los periódicos, remítanse los de la materia al Juzgado de su origen para los efectos legales, archivándose el toca. Así por mayoría lo proveyeron los ciudadanos Presidente y Magistrados que forman la primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, fungiendo como de Circuito, y firmaron. —(Firmado.)—*Manuel Posada.*—*Miguel Castellanos Sanchez.*—*Pablo M. Rivera.*—*A. Zerecero.*—*José M. Herrera y Zavala.*—*Cirio P. de T'agle*, secretario.

*Pedimento del ciudadano Promotor fiscal en el recurso de súplica interpuesto por D. Francisco de P. Pastor, en el negocio á que se refiere la anterior sentencia.*

El fiscal dice: que D. Francisco Pastor, representante de la Empresa del camino de Toluca á Morelia, ha suplicado de la sentencia de vista que con fecha 26 del pasado pronunció esta superioridad en el juicio de amparo que tenia promovido: para que se le admita ese recurso, expresa que lo ha interpuesto en tiempo, y que hay falta de conformidad sustancial entre esa sentencia y la de 1ª instancia, fundándola en que aun cuando en el fondo ambas le son adversas, hay sin embargo entre ellas una notable diferencia, cual es la salvedad de sus derechos para reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios, la cual está es-

presada en la 2ª de las resoluciones de la sentencia de vista.

De los dos fundamentos en que apoya el suplicante el recurso, el primero es evidente, pues lo interpuso en tiempo, pero no sucede lo mismo con el segundo, esto es, que la sentencia de vista no sea conforme con la de 1ª instancia para que la revoque ó modifique, que es el caso expreso del artículo 18 de la ley de 30 de Noviembre de 61, para que sea suplicable el fallo de 2ª instancia.

Hay que tener presente, que ese artículo no dice que sea conforme de toda conformidad con la 1ª sino simplemente, que si la sentencia de vista fuere conforme con la de 1ª instancia, causará ejecutoria; por lo mismo, no se podrá exigir en el juicio de amparo que sea conforme de toda conformidad, como para los casos comunes lo exigen los artículos 77 de la ley de procedimientos y el 156 de la ley de 23 de Mayo de 37, para que la sentencia de vista cause ejecutoria; y sin embargo de la precision de esos dos artículos sobre que sea conforme de toda conformidad con la 1ª, previenen que no puede decirse opuesta á esta conformidad, ni la condenación de costas, ni cualquiera otra demostración que no altere la resolución del negocio.

Como este precepto es de una ley que está vigente, y se debe estar á lo que dispongan las leyes comunes en los casos excepcionales sobre que no hay disposición, conforme á él deberá examinarse, si la salvedad de derechos expresados en la 2ª resolución de la sentencia de vista y de la que nada se dice en la de 1ª instancia, viene á ser una revocatoria ó modificación de ésta; el mismo interesado dice en su escrito de súplica, que en el fondo ambas sentencias le son adversas; luego según esta confesión, la sentencia de vista no es revocatoria: tampoco es modificativa, porque esa salvedad de derechos que dice el ciudadano Pastor, hace con la de 1ª instancia una diferencia substancial, no la hay si se considera que expresa esa salvedad, á omitida,



dejaban las dos sentencias expeditas al ciudadano Pastor, todos sus derechos que no hubieran sido expresamente resueltos en ellas, pues es sabido de todos los que tienen los rudimentos del derecho, que las sentencias no se extienden y no producen otros efectos que los expresados en ellas, así se ve, que en las sentencias de remate, expresen ó no que le queda al ejecutado expedita la vía ordinaria, la comprendo siempre que así convenga á sus intereses, y lo mismo sucede en todo juicio sumarísimo ó sumario de posesion, y aun en el plenario, pues para entablar el de propiedad, no se necesita que en aquellos se exprese esta salvedad.

Así, pues, ni la sentencia de 1ª instancia, omitiendo esa salvedad, ha quitado al interesado esos derechos, ni son una concesion de la sentencia de vista, porque hizo esa salvedad; por consiguiente, con ella no se ha alterado en nada la sentencia de 1ª instancia, y faltando esta circunstancia, no es suplicable la de 2ª.

En tal virtud, el Ministerio fiscal, pide á esa superioridad, así se sirva declararlo.

México, Octubre doce de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Antonio Aguado.*

*Sentencia del Tribunal de Circuito, declarando insuplicable su auto de veintiseis de Setiembre de mil ochocientos setenta.*

México, Octubre veintidos de mil ochocientos setenta.

Como pide el ciudadano fiscal y por los propios fundamentos de su respuesta, se declara insuplicable el auto de veintiseis de Setiembre del presente año.

Hágase saber: (Firmado) *Posada.*—*Rivera.*—*Zerecero.*—*Herrera.*—*Arteaga.*— Por ocupacion del ciudadano secretario, *José Ruperto Teña y Senande*, oficial mayor.

*Recurso de denegada súplica en el negocio á que se refiere la sentencia anterior.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

El Procurador General de la Nacion dice: que D. Francisco de P. Pastor, representando á la compañía que en años anteriores estuvo explotando el camino carretero entre las ciudades de Toluca y Morelia intentó ante el juzgado de Distrito de esta capital, un juicio de amparo contra la ley de 19 de Noviembre de 1867, que suprimió los peages, y contra el acto del Ejecutivo de la Union que mandó cesar á dicha compañía en la explotacion del mencionado camino.

Despues de varias dificultades, sobre si el negocio debia seguirse conforme á la ley orgánica de amparos de 30 de Noviembre de 1861, ó á la nueva de 20 de Enero de 1869; y resuelto que debia estarse á la primera, el juez de Distrito dictó sentencia definitiva negando el amparo. El representante de la compañía apeló de esta sentencia; y declarado que debia conocer en 2ª instancia la 1ª sala del Tribunal superior del Distrito, en su calidad de Circuito; ésta, despues de sustanciar la instancia, confirmó la sentencia de 1ª; agregando, que su fallo no perjudicaba los derechos de la empresa, para pedir la indemnizacion y resarcimiento de perjuicios que justificare habérsele causado.

El representante de la compañía suplicó, fundándose substancialmente en que la sentencia de 2ª instancia no era conforme de toda conformidad con la de 1ª. Substanciado artículo, la sala negó el recurso de súplica, y el apoderado de la compañía ha interpuesto el de denegada, que ahora se está substanciando.

El luminoso pedimento del fiscal de 2ª instancia, contiene razonadas consideraciones que, adoptadas como fundamentos del auto en que se negó la súplica, bastan pa-

ra apoyar la justicia con que ha procedido el tribunal de Circuito. El Procurador general se refiere en todo á dicho pedimento; y solo dirá para mas claridad, que con arreglo á la ley de 30 de Noviembre de 1861, para que la sentencia de 2ª instancia cause ejecutoria, no se necesita que sea conforme de toda conformidad con la de 1ª; basta que sea conforme en lo sustancial. Además, en el presente caso, las sentencias son conformes de toda conformidad; porque es indudable que con la de 1ª quedaron reservados á la compañía los mismos derechos que ha expresado la de 2ª, de manera que la única diferencia consiste en que en una la reserva es tácita, y expresa en la otra. Es tambien de notar que la súplica, lo mismo que la apelacion, se concede para el preciso objeto de reclamar el agravio inferido por una sentencia; y seria un contrasentido que la compañía se dijese agraviada con la sentencia de 2ª instancia, porque esta le reservó unos derechos, cuya reserva en la de 1ª habia sido tácita. Si alguna diferencia hay, consiste en que la sentencia de 2ª instancia, favorece de una manera mas explícita á la compañía; puesto que hace expresa la reserva que en la de 1ª solo estaba subentendida. No hay, pues, agravio, y por consiguiente no procede el recurso de súplica. Así pide el Procurador general se sirva decretarlo la sala; declarando en consecuencia que la sentencia de vista ha causado ejecutoria. Pide tambien se condene en costas á la parte de Pastor.

México, Diciembre siete de mil ochocientos setenta.—(Firmado) Leon Guzman.

*Ejecutoria de la 1ª sala de la Suprema Corte de Justicia, sobre el recurso de denegada súplica á que se refiere la anterior respuesta.*

México, Enero cinco de mil ochocientos setenta y uno.—Visto el recurso de súplica denegada interpuesto por el C. Francisco de P. Pastor ante la primera sala del

Tribunal superior de Distrito, en calidad de Circuito, en el juicio de amparo promovido por él en representacion de la Compañía empresaria de construccion y reparacion del camino de Toluca á Morelia, contra la aplicacion que el ministerio de Fomento ha dado á la ley de 19 de Noviembre de 1867: vista la sentencia pronunciada por el Juzgado 2º de Distrito de esta capital en 6 de Agosto del año próximo pasado; la pronunciada por el tribunal de Circuito en 26 de Setiembre del mismo año; lo pedido por los ciudadanos promotores fiscales y por el ciudadano Procurador general; lo alegado por el quejoso y todo lo demas que de autos y ver convino, y considerando: 1º Que se ha negado el amparo al quejoso, tanto en primera como en segunda instancia, con sola la diferencia de que en la segunda se dejan á salvo esplicitamente los derechos que pueda tener para demandar en juicio correspondiente la indemnizacion y resarcimiento de los perjuicios que justifique habersele causado: 2º que esta diferencia no importa variacion en lo sustancial de los fallos, pues se comprende, que aunque la sentencia de primera instancia no determina sobre esos derechos, los dejó tambien á salvo, pues todo individuo puede ejercitarlos entre tanto no se declara por autoridad competente que carece de ellos; y 3º, que con arreglo á los artículos 11 y 24 de la ley de 30 de Noviembre de 1861, el juez debe limitarse á declarar que la justicia federal ampara ó no ampara al quejoso, por cuya razon no hay diferencia en las sentencias de primera y de segunda instancia, confirmada la primera por la segunda: con fundamento de los artículos citados y de la ley de 14 de Febrero de 1834, se declara: que no ha lugar á la súplica interpuesta por D. Francisco Pastor en representacion de la Compañía empresaria de construccion y reparacion del camino de Toluca á Morelia.—Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la primera sala de la Corte Suprema de justicia de los Estados-Unidos



mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—Enrique Landa*, oficial mayor.

Son copias que certifico. México, Enero cinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Enrique Landa.*

### AMPARO.

*Juicio promovido por los ciudadanos Francisco Cabrera, Rafael Grajales y otros noventa y un ciudadanos, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 5º y 14º de la Constitución federal.*

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR  
FISCAL DEL JUZGADO DE DISTRITO DE  
PUEBLA.

Ciudadano Juez de Distrito.

Una vez pronunciada la sentencia no puede el juez revocarla, enmendarla, corregirla ó adicionarla por prohibírselo las leyes 39, tít. 1º, lib. 5º de la N. R., y 3ª tít. 22, part. 3ª: lo cual es mucho mas evidente, cuando la sentencia haya sido confirmada por el tribunal revisor, en términos de haber causado ejecutoria.

Ahora bien; el juicio que hoy se promueve es el mismo que antes promovieron las 54 personas de que se hace referencia en el penúltimo párrafo de la demanda, sin mas diferencia que la de suscribir el pedimento individuos que antes no lo habían hecho; y como ya fué sustanciado y definido por el suplente de V. C. F. de Jesus López, despues de haberse V. inhibido del conocimiento, en este juzgado, no puedo ni debo ya tocarse el punto, por ser realmente incidente del principal, pendiente ante la Suprema Corte, á cuya autoridad corresponde exclusivamente modificar la sentencia pronunciada en observancia del artículo 15 de la ley de 20 de Enero de 69; dan-

do entrada en el juicio á personas distintas de las que lo habían promovido.

Debe, por tanto, consignarse á ese Supremo Tribunal la resolución que se solicita, á menos que haya sido dada sentencia confirmatoria ó ejecutoriada; pues entonces no puede dudarse, que á la autoridad de vd. corresponde, no abrir nuevo juicio, con infraccion de las leyes citadas antes, sino hacer extensiva á los solicitantes la resolución dada, á fin de que no sean ya molestados en el cobro sobre que se les ampara.

A los promoventes, pues, toca comprobar el verdadero estado del negocio principal; puesto que hasta ahora no hay en autos la constancia competente y legal que deba normar las siguientes operaciones.

Así pide á vd. el Promotor, se sirva declararlo ó reservarlo al suplente mencionado, si aun existe el impedimento que le impidió al principio el conocer de este mismo negocio.

Zaragoza, Noviembre quince de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Eugenio Sanchez.*

### *Otro pedimento del mismo ciudadano Promotor fiscal.*

Ciudadano Juez de Distrito:

Reservado á la justificacion de la Corte Suprema de Justicia el calificar la resolución sobre la legalidad de mi pedimento de 15 del presente, y convencido de que contra su denegacion no cabia recurso alguno legal, me limité á darme por entendido del auto de vd. del dia 16, sin desconocer la validez con que estaba dictado.

Del mismo modo, habiendo sido mi opinion contra el amparo que hoy se promueve de nuevo, á la vez que, como alegué últimamente, la sentencia no debe variarse, y menos si como se dice, ha sido confirmada en revision, ni pudiendo tampoco contradecirla el que suscribe, reproduce los funda-